

COMUNICADO DE PRENSA

Bogotá, 31 de mayo de 2016. Con respecto al Proyecto de Ley No. 072 de 2014 (Senado) y 195 de 2015 (Cámara de Representantes) la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada informa que:

1. La ponencia radicada en la Comisión Segunda el 27 de mayo del presente año, podría tipificar una expropiación indirecta contra las empresas de vigilancia y seguridad privada con capital extranjero que prestan sus servicios en el país desde hace varias décadas.

Constituye además una grave prohibición que se extendería a sectores de la industria como las empresas de blindaje y arrendamiento de vehículos acondicionados con estos elementos, que cuentan con socios o capital extranjero y que actualmente participan en el mercado en igualdad de condiciones, generando importantes ingresos operacionales, prestigio y calidad en este servicio.

2. La ponencia al igual que el texto aprobado en Senado, contempla un régimen sancionatorio que no recoge las realidades del sector y que sitúa sanciones, multas y montos, dependiendo de la falta que van desde 5 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual no resulta, consecuente con la gravedad de la falta, con la relevancia del sector en la economía y con los impactos de las faltas graves y gravísimas en la prestación del servicio.

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, presento vía Ministerio de Defensa Nacional, una propuesta de régimen sancionatorio integral, con tipos, sanciones y procedimientos con el lleno de las garantías y acordes a los servicios, pero no fue tenido en cuenta, ni en el texto aprobado en Senado, ni en la ponencia de Cámara.

3. El Proyecto elimina la facultad discrecional que desde su origen a mantenido la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para aprobar, renovar y cancelar licencias de funcionamiento a los servicios, lo cual ha sido una herramienta útil en la lucha contra la criminalidad que de manera regular pretende permear estos servicios. El Consejo de Estado en reiterados fallos ha mantenido intacta dicha facultad, señalando que está acorde con la naturaleza de estos servicios y con la protección de valores

fundantes del Estado colombiano, como la tranquilidad, la seguridad ciudadana y la confianza pública.